

INTRODUCCIÓN

AMÉRICA LATINA, NUEVAS RURALIDADES, VIEJAS Y NUEVAS ACCIONES COLECTIVAS

NORMA GIARRACCA*

LA CEPAL CARACTERIZA el sexenio que va de 1998 a 2003 como “el sexenio perdido” para la región. De este modo, hace referencia al pobre desempeño de las principales variables económicas y rememora lo que a fines de los años ochenta caracterizó como “la década perdida”. El discurso neoliberal sostenía que, después de las reformas estructurales de los ochenta y noventa, las economías crecerían y los sectores populares recibirían el derrame (el famoso *trickling down*) de tal crecimiento. No fue así: sólo la variación del Producto Bruto Interno (PBI) para la región muestra una caída sostenida desde 1998, que llega a su punto culminante en el año 2002 por las repercusiones de la crisis argentina. Pero este país no fue el único que mostró las consecuencias de las “políticas de mercado” impuestas por los organismos multilaterales y aceptadas por las dirigencias políticas locales; Uruguay, Venezuela, Haití y varios países del Caribe registran tasas anuales negativas en la variación de su PBI, y las que crecen lo hacen en muy pequeñas magnitudes (CEPAL, 2003).

* Socióloga, Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, UBA. Ex-coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO (1997-2001).

Desde la década de 1980, las políticas públicas de América Latina tendieron a reorientar la intervención estatal, liberalizar la economía y la apertura al comercio internacional, tomando como variable de ajuste el salario. De este modo, crecieron las tasas de desocupación y se precarizaron las condiciones laborales de los que aún conservaban sus puestos de trabajo. Las políticas públicas ortodoxas –como el Plan Austral (1985) y el Plan de Convertibilidad (1991) de la Argentina, la megaestabilización de Bolivia (1985) y una serie de programas de estabilización como los de Collor de Melo y Cardoso en Brasil entre 1986 y 1999, y en México entre 1987 y 1994– pusieron en marcha los mecanismos institucionales para llevar a cabo una transformación sin precedentes en el siglo XX. Las agriculturas y las poblaciones afectadas sufrieron las consecuencias de tales cambios macroinstitucionales.

Reca y Echeverría (citado por Spoor, 2002) sostienen que la participación del sector agrario de América Latina en su conjunto pasó de representar un 15% del PBI en 1970 a un 10% en la década de 1990. Al parecer, en términos puramente productivos, el desempeño de las agriculturas no fue mejor después de la desregulación y la apertura externa. Según los especialistas, no existen diferencias sustanciales en las tendencias de producción y exportación con respecto a períodos previos en los que hubo una fuerte intervención estatal, como en las décadas de los sesenta y los setenta, pero hay otras fuentes de vulnerabilidad que parecen emerger como consecuencia de la apertura, tales como las derivadas de la volatilidad internacional y de la distribución interna (Spoor, 2002: 382-383).

En otras palabras el desempeño de las variables macroeconómicas no mejoró y las consecuencias en el nivel social fueron atroces. En efecto, el retroceso de las amplias mayorías en la participación de las riquezas nacionales fue sistemático durante dos décadas: “la década perdida” –la de 1980– y la de los noventa. Pero, en esta última, los índices que miden la pobreza y la indigencia subieron en tal magnitud que los constructores del modelo idearon y lanzaron los famosos programas de “alivio” que lograron bajarlos en términos relativos en los últimos años.

Un informe de la CEPAL sobre el Panorama Social de América Latina 2002-2003 muestra que, si bien los porcentajes de población pobre bajaron del 48,3% al 43,9% entre 1990 y 2002, en el volumen absoluto de personas se registró un aumento de 20 millones de pobres y la cifra pasó de 200 a 220 millones. Lo mismo ocurre en el nivel de indigencia. Tal vez el caso más dramático sea el de la Argentina, cuyos

gobernantes siguieron al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional endeudando al país, entregando sus recursos naturales a las empresas transnacionales, flexibilizando el mercado laboral y desregulando la economía. Como consecuencia de ello, provocaron una de las crisis más profundas de la historia nacional: entre 1999 y 2002, el índice de pobres llegó prácticamente al doble (pasó del 23,7% al 45,4%), mientras que los indigentes se multiplicaron por tres. En realidad, América Latina no fue la única que sufrió las consecuencias del modelo neoliberal; el crecimiento de la economía mundial fue más bajo entre 1980-2000 –época de oro del liberalismo y de la desregulación que se hacía en nombre del crecimiento– que en los años 1960-1980, período de regulación y proteccionismo (Cassen, 2003).

En este escenario, se llevan a cabo las acciones colectivas y surgen nuevos actores sociales. Muchas de estas nuevas experiencias tienen que ver con el mundo social rural y agrario. Según el *Report on Rural Movements* de NACLA (2000), en muchas partes de América Latina los movimientos sociales rurales han tomado el centro del escenario político de su nación. Y nosotros agregamos que este fenómeno no es exclusivo de países con una fuerte tradición de luchas campesinas, como Brasil o México, sino que se da también en países con una historia significativa de luchas obreras urbanas, como la Argentina, donde aparecen nuevos actores, no necesariamente articulados al mundo industrial o urbano.

Al finalizar la década de 1990, la protesta se hizo global y se enfocó contra los organismos internacionales que promovieron estas transformaciones (la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera). Asimismo, entre fines de 1993 y 1994 en muchos países de América Latina aparecieron novedosas y significativas resistencias que recuperaron las experiencias y luchas que se venían desplegando desde el comienzo de la mencionada década.

A mi juicio, en ese momento pueden contabilizarse tres acontecimientos que atravesaron el continente de Norte a Sur (o de Sur a Norte). Primero, la aparición del movimiento zapatista en México, en el mismo instante en que el país ingresaba al TLCAN (Tratado de Libre Comercio con América del Norte). Este colocó en el espacio de las resistencias un nuevo pensamiento político, por primera vez a distancia del Estado, centrado en la autonomía y con una lógica discursiva más cercana a la estética “expresiva” que a la “científica” de los viejos discursos de izquierda. Como dice Alain Badiou, “la irrupción de

Chiapas fija una medida –una distancia– al Estado mexicano; muestra que tal Estado puede ser identificado y limitado por una nueva forma de acción política” (Badiou, 2003: 13)

El desarrollo de la tecnología informativa y comunicacional habilitó nuevas formas de circulación del capital financiero, que fue uno de los pilares del nuevo modelo, pero también permitió la acción a distancia de los grupos en resistencia. Y tal vez el ejemplo paradigmático de esta situación haya sido la propagación de las ideas del zapatismo y su tremendo impacto en una población mundial que vivía con cierto malestar el avance “deshumanizante” del capitalismo neoliberal. Hoy, muchas de las ideas del zapatismo circulan por espacios académicos, culturales y artísticos y encuentran numerosos aliados en el mundo social urbano europeo. De hecho, el primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo –llevado a cabo en Chiapas a fines de julio de 1996 por iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la presencia de casi medio centenar de organizaciones de la resistencia de todo el mundo– es considerado el antecedente más importante de la serie de protestas que se conoce como movimiento social de la antiglobalización neoliberal.

El segundo acontecimiento ocurre en la Argentina y es casi simultáneo al levantamiento zapatista. Fue en una de las provincias más pobres, Santiago del Estero, que tiene una alta proporción de población rural. La rebelión se desató en su ciudad capital, donde la gente vive de la administración pública o de los servicios hacia la agricultura. La “pueblada” se produjo contra las autoridades del estado provincial y se manifestó a través de la quema de edificios y la persecución de los políticos corruptos. Ese episodio, en pleno gobierno de Carlos Menem, se recuerda como el “santiagueñazo” y es un importante antecedente de la crisis de 2001. A partir de entonces, los índices de abstención electoral de la provincia treparon al 50% y comenzó un período de politización de la sociedad civil que llevó a una persecución política y social feroz por parte del poder provincial. Esta situación hizo crisis en 2003 con el asesinato de dos jóvenes, que el gobierno intentó ocultar por estar involucrado. Nuevamente la gente ganó las calles, aunque esta vez lo hizo en forma pacífica, buscando justicia y un cambio político. Esta irreconciliable relación entre la sociedad civil y los representantes del gobierno impregnó los avatares de la política argentina desde esos primeros momentos de 1994. Los hechos del 19 y 20 de diciembre marcaron el momento culminante de este

ciclo en el nivel nacional. A pesar del proceso abierto desde el nuevo gobierno de Néstor Kirchner –que despertó grandes expectativas–, la tensión entre “representantes-representados” y el cuestionamiento a la idea de “representación” –clave de la democracia liberal– son centrales en el pensamiento de muchas de las nuevas formas políticas surgidas desde entonces¹.

El tercer acontecimiento ocurre en Ecuador. En efecto, en junio de 1994, pocos meses después de los sucesos de México y de la Argentina, los indígenas de todo el territorio convocaron a una movilización que paralizó el país durante dos semanas. Como sostiene Nina Pacari (1996), abogada y líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la protesta se orientó en contra de la Ley de Desarrollo Agrario, pieza clave del plan de ajuste estructural del programa implementado por Sixto Durán Ballén. “La ley aprobada por el Congreso apelaba por la eliminación de las tierras comunales a favor de la agricultura empresarial, además de otras medidas que favorecían los intereses de los grandes terratenientes. Se ignoraba todo lo concerniente a los indígenas, campesinos y pequeños agricultores del Ecuador” (Pacari, 1996: 23, traducción propia). En los años posteriores, el movimiento indígena convergió con otros, no indígenas y urbanos, y dio lugar a la formación del Movimiento Pachakutik, que durante los noventa incursionó en el campo de la política partidaria. Le siguió luego 1997 con la destitución del presidente Abdalá Bucará, la Asamblea Constituyente de 1998 y la destitución del presidente Jamil Mahuad en el año 2000 (Dávalos, 2003). Finalmente, a fines del año 2002, el Movimiento Pachakutik fue protagonista de la alianza electoral que llevó al triunfo electoral del Coronel Lucio Gutiérrez, pero, a los pocos meses de gobierno, sus miembros se retiraron. Este proceso dinámico transcurrido en una década transformó el destino que históricamente se deparó a los indígenas de América Latina y, una vez más, marcó un hito en el pensamiento político de la región. A pesar de ser mayoría en varios de nuestros países, los pueblos originarios nunca antes se habían propuesto gobernar. Ecuador y luego Bolivia ponen esta cuestión en la agenda política regional.

Podríamos sumar a este listado de protestas, resistencias de campesinos e indígenas, “puebladas”, fortalecimiento de organizaciones, otros tantos hechos ocurridos en el período: el Movimiento dos

¹ La abstención electoral en un país con voto obligatorio trepó de una cifra histórica inferior al 20% al 32% en el conjunto de las varias elecciones del último año, con excepción de la elección presidencial.

Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil –así como los numerosos sindicatos campesinos de este país, como la Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)–, la Federación Nacional Campesina de Paraguay, los movimientos campesinos e indígenas de Bolivia, Colombia, Perú, Chile y la Argentina. La mayoría de ellos se integran en la organización que los agrupa –Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)– y, a través de ella, en la organización internacional Vía Campesina.

Del mismo modo, se va desplegando a lo largo del continente una lucha por la preservación de recursos naturales en encuentros de poblaciones campesinas y pequeños centros urbanos, como los casos de Cochabamba y de la protesta por la privatización del agua en el Sur de Tucumán en Argentina (Giarracca y Del Pozo, 2004). Las poblaciones mapuches del Sur argentino reclamaron por la instalación de una empresa minera, aduciendo lo que significaría en términos de gasto de agua; los campesinos y comunidades de pueblos originarios de Bolivia se opusieron a la exportación del gas boliviano a EE.UU. a través de Chile y protagonizaron una rebelión que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada. En esta misma dirección, el sociólogo Bernard Duterme advierte que en Chiapas la privatización de los bienes públicos transformará la tensión entre pueblos indígenas y Estado en una confrontación entre los últimos y las empresas transnacionales, por la disputa por las riquezas naturales de la región (Duterme, 2004).

Nuevos reclamos y nuevas estéticas comienzan a circular de manera significativa de un lado al otro del continente sin que sus protagonistas, que coinciden en sumar al reclamo histórico de la tierra el de otros recursos naturales, sepan necesariamente unos de otros. Con el correr de los primeros años del siglo XXI, la lucha por los recursos naturales se instala como central y el concepto de “territorio” reemplaza al de “tierra”, pues la incluye y suma las riquezas del subsuelo.

El encuentro entre las organizaciones campesinas e indígenas en federaciones continentales e internacionales, la movilidad territorial de algunos de los dirigentes y los principios universalizables de orden político –como pueden ser la “soberanía alimentaria”, el respeto a la biodiversidad, la bioseguridad, así como el respeto a la igualdad de género, a la diversidad cultural, a los derechos humanos– marcan las novedades, producen nuevos sentidos y nos desafían a pensar desde nuevos paradigmas (véase *Vía Campesina*).

Un párrafo aparte amerita el proceso que se generó durante los últimos años en el campo mexicano. “El Campo No Aguanta Más”, junto con muchas otras organizaciones campesinas e indígenas, reaccionó ante la devastación agraria prevista por el TLCAN. Asimismo, se sumaron luchas campesinas como la de Atenco, estado de México, contra la destrucción del aeropuerto en Texcoco; la de las comunidades de Montes Azules, Chiapas, contra los desalojos; la de Tepoztlán, Morelos, contra un campo de golf, y la de los campesinos ecologistas de Guerrero contra los talamontes transnacionales y por la libertad de sus presos (Bartra, 2003).

Lo que el libro presenta

Lo que este libro viene a proponer se relaciona justamente con los cambios económicos y macroinstitucionales que se han dado en América Latina en las últimas décadas, y también con las protestas, los movimientos sociales y las acciones colectivas que los actores han desplegado en nuestro subcontinente, de Norte a Sur. Encontraremos en sus páginas diferentes miradas, modos diversos que incluyen desde el análisis de datos estadísticos hasta etnografías, historias de vida que nos acercan a hombres y mujeres en situaciones complejas y frecuentemente dramáticas.

Todos estos trabajos fueron realizados por jóvenes investigadores de las Ciencias Sociales de América Latina. Algunas veces enfocan problemas de regiones específicas o realizan interesantes comparaciones entre la situación de dos países distintos, pero situando siempre al lector en un contexto más amplio.

Por razones de organización, dividimos el texto en dos partes: en la primera, se presentan los trabajos referentes a cambios en el mundo social agrario, donde se incluye a los jóvenes, a los migrantes o a las comunidades como sujetos sociales. En todos ellos, se muestran los sujetos enfrentados y buscando una salida a esta situación de exclusión y arrinconamiento. Es decir, estos primeros trabajos nos hablan de los sujetos como constructores activos de su mundo social, que generan sus propias estrategias frente al desamparo de los estados nacionales.

Los investigadores mexicanos nos acercan el fenómeno de la migración con todos sus matices y complejidades. Los reconocidos psicoanalistas Raquel y León Grinberg (1984) –ellos mismos migran-

tes– sostienen que la migración implica incursionar en lo desconocido, comprometerse con hechos futuros que no son previsibles y, además, afrontar sus consecuencias. El migrante altera las imágenes construidas en la experiencia de vida del lugar de origen y, desde el momento de la partida, “lugar y presente” pasan a ser desconocidos. Asimismo, las migraciones modifican y resignifican los acopios culturales, los conocimientos adquiridos y las prácticas sociales. La migración puede ser vista como una necesidad pero también como una estrategia social de sujetos que se oponen y no se resignan a una situación de arrinconamiento y exclusión.

“Nueva York es como Puebla” es parte del título del trabajo de Blanca Laura Cordero Díaz, en el que analiza cómo los habitantes de Huaquechula, en el Valle de Atlixco, Puebla, se incorporan a un flujo migratorio masivo, sostenido y creciente hacia los Estados Unidos. Desde los años setenta, Nueva York es la ciudad elegida por muchos, imaginada –justificadamente– como centro financiero internacional donde no falta el empleo y de donde, tras unos años de trabajo duro, se regresa con dinero, o se lo acumula para mejorar las condiciones de existencia de los que quedaron. Si bien la autora enmarca el fenómeno poblano dentro de un proceso migratorio de larga data que involucra a las economías campesinas, se encarga de demostrar que el fenómeno de las últimas décadas presenta ciertas características singulares. Las migraciones recientes están signadas por los cambios macroinstitucionales que producen el “carácter trasnacional” de la organización de la supervivencia. Carácter este que, como demuestra la autora, no se expresa de igual modo en hombres y mujeres: ellos son los que emprenden la partida y toman la iniciativa; ellas suelen alcanzarlos y, una vez allá, legitiman su incorporación al mercado laboral –algo impensable en las comunidades de origen– con el argumento “para salir adelante”. En Nueva York, todos cooperan en los gastos de comida y mantenimiento de la casa, y esta “mercantilización de la vida”, según la autora, “contrasta mucho con sus formas de vivir en la localidad rural”.

Nueva York está plagada de migrantes latinoamericanos, por lo general mexicanos, pero también ecuatorianos, colombianos y, en los últimos años, muchos provenientes del Cono Sur. El cruce de las fronteras, el paso por México –para los que hacen la travesía desde Sudamérica– son experiencias que los latinos en Nueva York rememoran con dolor. La cercanía de la muerte al cruzar el desierto, la dependencia de los “coyotes” que los transportan en condiciones infrahumana-

nas, la llegada a una ciudad de dimensiones y complejidades inimaginables, las peripecias de su situación de ilegalidad frecuente, etc., son aspectos que aparecen como componentes de este nuevo modo transnacional de organizar la vida huyendo de “algo” que se consideró más amenazante que los riesgos tomados. En esa comparación entre la amenaza que se deja atrás y el riesgo de la travesía migratoria, se juega, básicamente, la posibilidad de conseguir un ingreso que, en la experiencia de la vida diaria, implica que los hijos no pasen hambre ni mueran por falta de atención médica, o poder regresar con dinero ahorrado para encarar “la vida” en el país de origen. Pero, en la opción migratoria, también aparece un dispositivo muy importante: las remesas.

El segundo trabajo sobre este tema es el de Luis A. López Ruiz, en el que se relacionan los cambios en la estructura ocupacional de las zonas rurales mexicanas con el fenómeno de la migración transnacional hacia los EE.UU. Y es el autor quien discute la función de las remesas, tanto para los grupos familiares como para las economías locales.

Las remesas tienen un efecto positivo y reconocido como tal en el nivel macroeconómico, especialmente en lo referente a la balanza de pagos de México. Nos dice el autor que, para 1997, “el valor de las remesas familiares equivalía a poco menos de la mitad de los ingresos por exportaciones petroleras. De igual manera, ese mismo año, ingresaron cerca de cinco mil millones de dólares en concepto de remesas, cifra que representó casi el 85% del ingreso del turismo, el 40% de la inversión extranjera directa y el 11% del valor de las exportaciones en la industria maquiladora, superando prácticamente en un 30% a las exportaciones agropecuarias. No obstante, no existe consenso acerca de la función que tienen las remesas, tanto en el nivel de las economías locales como en el interior de las economías domésticas”.

López Ruiz, siguiendo a Canales, sostiene que las remesas constituyen un importante componente de la economía local y doméstica. Sin embargo, los límites de estos recursos, que funcionan como un ingreso o salario, los impone el mismo ambiente socioeconómico que conduce a las personas a emigrar. Los datos detallados que presenta el autor acerca de la frecuencia y los montos de las remesas demuestran que la importancia de esta entrada de dinero radica en el significativo número de mexicanos que está afuera más que en la cantidad de dinero que recibe cada familia.

Las migraciones crecieron en todo el mundo en las últimas décadas, sobre todo las del Sur hacia el Norte. Este fenómeno ha

tenido implicancias en los países expulsores y en los receptores. La posibilidad de migrar siempre estuvo presente para el mundo rural de América Latina. Se migraba internamente siguiendo la estacionalidad de las cosechas y entre países limítrofes en los momentos pico de la temporada agrícola (Colombia-Venezuela; Paraguay-Argentina, etcétera). En México, el fenómeno de la migración de braceros, y luego de sus familias, hacia su vecino del Norte tiene larga data. No obstante, la migración que Cordero Díaz y López Ruiz presentan y conceptualizan como “transnacional” tiene las marcas de una época, que para México comienza a mediados de los ochenta y tiene, a mi juicio, dos momentos posteriores significativos: la Reforma del Artículo 27 de la Constitución y la incorporación al TLCAN. Como en el resto de los países, estas medidas macroinstitucionales –tomadas por los estados nacionales bajo los lineamientos de los organismos multilaterales de crédito– destruyeron el andamiaje institucional que se había construido en distintos momentos del siglo XX y que sostenía la posibilidad, siempre precaria y conflictiva, de una integración de los sectores subalternos a la lógica de los capitalismo nacionales. A partir de las transformaciones neoliberales, esta posibilidad desaparece y son los propios sujetos los que deben generar su propia estrategia de supervivencia. Esta situación resignifica todo, y también las distintas migraciones.

Las transformaciones en el mundo social que rodea el campo, así como los cambios en el nivel de la producción agraria, pivotados por poderosos actores económicos, resultan en nuevas configuraciones que los sociólogos latinoamericanos conceptualizamos como “nueva ruralidad” (Giarracca, 2001). En el libro que resultó de la investigación del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO, Edelmira Pérez entendía que la nueva ruralidad hace referencia a un “territorio” –fuentes de recursos materiales, naturales y materias primas–, cuya población lleva a cabo actividades en distintos sectores, como la agricultura, la artesanía, las pequeñas industrias, el comercio, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales y el turismo, entre otros (Pérez, 2001: 17). A esta aproximación al fenómeno de la “nueva ruralidad”, le podemos agregar el incremento de las migraciones, la pluriactividad familiar y la multiocupación de las personas, el crecimiento de la densidad poblacional en las comunidades y pueblos (el fenómeno de la “rururbanización”), y la importancia de los territorios y lugares en la articulación de las estrategias familiares, de las nuevas protestas y movimientos sociales.

Los otros dos trabajos de esta parte del libro nos acercan cuestiones relacionadas con estas transformaciones en los territorios y presentan dos sujetos sociales de distintos países: el destino de una comunidad de Brasil al tomar contacto con la “modernización” y los jóvenes del Uruguay rural.

Simone Rezende Da Silva, en su estudio sobre Camburi, se centra en una población campesina de la zona rural del municipio de Ubatuba (San Pablo, Brasil), y analiza su modo de vida y reproducción. La autora describe la intervención que sufrió por parte de un proyecto estatal de Unidades de Conservación Ambiental y las complicaciones que esta le trajo en relación con la vida y la reproducción. Rezende nos propone comprender a Camburi –considerado como un barrio rural– y a los problemas de sus habitantes campesinos a la luz de una serie de acontecimientos de la sociedad dominante. Primero, los discursos de la “modernización” atravesaron la comunidad y, en la medida en que consideraron la naturaleza como recurso disponible, la separaron de la sociedad y de los hombres. Pero cuando esta situación desplegó todas sus consecuencias negativas y se tornó intolerable, los mismos depredadores crearon las unidades de conservación ambiental, ignorando de manera autoritaria a sus habitantes.

No obstante, la comunidad respondió con diversas acciones colectivas que pusieron al descubierto la hipocresía del discurso ecologista oficial (representado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera). En ese discurso, la naturaleza aparece como “intocada”, aislada de los hombres y mujeres, que pasan a convertirse en puros espectadores. Las nuevas acciones –que van desde la recuperación de la identidad afrobrasileña hasta un nuevo ecologismo– se analizan en el trabajo de Rezende con un importante despliegue de recursos metodológicos. En efecto, a través de los relatos y de las historias de vida de los pobladores, se va indagando acerca de la cultura, la religión, los trabajos y las penurias de los pobladores de Camburi. Seguir esta saga comunitaria permite visualizar sus derroteros y las consecuencias de las decisiones de las políticas públicas. En nombre de “la modernización” y luego de la protección ambiental, quienes toman medidas son incapaces de registrar las consecuencias en el nivel de la vida cotidiana, la construcción social, el aprendizaje, el trabajo y la cultura de las poblaciones.

El último trabajo de esta parte del libro se centra en los jóvenes rurales de la República del Uruguay y lo primero que se pregunta

Juan Romero es, precisamente, qué es ser joven y qué es ser rural. El autor se basa en datos estadísticos que permiten mostrar que hay más hogares rurales que urbanos con necesidades básicas insatisfechas. Podemos inferir entonces que ser joven rural implica mayor probabilidad de tener carencias materiales para atravesar las primeras etapas de la vida, en las que aspectos tales como la alimentación, la educación, la salud y la recreación marcan diferencias entre los seres humanos. Otros datos que otorga el trabajo muestran el alto porcentaje de unidades agrarias que desaparecen, sobre todo, en los estratos de menor tamaño. Esta tendencia permitiría inferir que la inestabilidad económica y el empobrecimiento de estos hogares afectan también de manera diferencial a los jóvenes rurales uruguayos. La pérdida de los patrimonios –la mayoría de las veces familiares– genera una gran incertidumbre ontológica en las generaciones que la sufren. Y se puede deducir de la información otorgada por Romero que una parte importante de la población rural en Uruguay sufrió, como en el resto de América Latina, la pérdida de pequeños patrimonios y, por lo tanto, se empobreció. Los jóvenes y los niños pertenecientes a grupos familiares que habían logrado heredar o adquirir propiedades y acceder a la educación y a la salud, debieron enfrentar un presente signado por el despojo de sus bienes y derechos. El trabajo muestra que los jóvenes tienden a dejar los poblados pequeños (de menos de 5 mil habitantes) y que prefieren las ciudades más grandes para lograr sortear estas situaciones por sus propios medios.

Los jóvenes de toda América Latina están en condiciones de vulnerabilidad, y más aún los que nacieron y se criaron en las zonas rurales, pues se hipotecó su presente sin tomarlos en consideración. La migración hacia el “Norte” apareció en el horizonte de la salvación personal o familiar, pero configuró un fenómeno social denso y extendido. Mientras tanto, en nombre del discurso modernizador, en Brasil y en todos lados, se siguen desarmando viejos espacios que las poblaciones campesinas ocuparon durante mucho tiempo y que sólo necesitan de un apoyo sensato: políticas públicas de carácter universal en la educación, la salud, la infraestructura y la vivienda. Por eso, la idea de la organización con autonomía comienza a rondar a las comunidades indígenas y campesinas de América Latina.

Viejas y nuevas acciones colectivas

En este apartado presentaré los trabajos cuyo centro de análisis ya no es el registro de los problemas agrarios o de las estrategias de los sujetos de ese mundo, sino *las resistencias, las acciones colectivas*. Con estos amplios conceptos, hago referencia a las acciones sociales que no se generan en los dominios de la producción o de la vida cotidiana sino que se despliegan en las arenas del espacio público. Ese espacio de aparición donde la presencia se juega ante los otros en la posibilidad de modificar los lazos; espacio donde se enuncian discursos, se irrumpe, se demanda y, básicamente, en el decir de Tilly, se confronta. Espacio público, entonces, donde se despliegan las disputas hegemónicas y alternativas de discursos y sentidos. Mientras que las estrategias sociales se manifiestan en los límites de la familia, de las explotaciones, las acciones colectivas se generan en la politización de la calle, de la ruta, de la plaza; en la marcha, en la toma de un predio, etcétera.

A partir de los años noventa, las acciones colectivas llevadas a cabo en el mundo agrario de América Latina contienen gran parte de los sentidos presentados en el párrafo anterior. En todas estas nuevas acciones no se incluyen expresiones de violencia física, pues, hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, que comenzó presagiando una guerrilla, a muy poco de andar transformó sus armas en un puro símbolo de defensa y sus acciones se fueron convirtiendo en modos civiles de resistencia que despertaron entusiasmo y apoyo de “todos los mundos”².

En las luchas surgidas en la década de los noventa, la acción directa –con posibles daños a propiedades, muebles e inmuebles– se complementa con acciones “no violentas”, deliberativas y autónomas. Estas son disruptivas, como toda acción colectiva, pero han evitado el enfrentamiento armado y la violencia física hacia las personas, contra los cuerpos. La violencia pasó a ser monopolio de los aparatos represivos (estatales y privados), mientras que los códigos y sentidos de las luchas populares se mostraron menos ambiguos en ese aspecto.

2 A raíz de la celebración de los diez años del levantamiento de Chiapas, Gianfranco Betin, actual vicealcalde de Venecia, Italia, sostiene: “Con las armas en las manos, los indígenas de Chiapas se mostraron, en realidad, inermes dentro del sistema –exhibir en un acto extremo las armas, pero no a la manera del terrorismo ni de las guerrillas precedentes, sino en un lineal y limpio levantamiento popular que sin fecha ni lugar podría, sin embargo, pertenecer a todos los lugares del mundo donde los derechos fundamentales son pisoteados y a todas las épocas donde esto se consiente– y, en tal ostentación de lo inerme que ya no es soportado, y que así arma pobremente la mano de quien se rebela, los zapatistas mostraron una especie de candor que desarma” (*Página 12*, 31 de diciembre de 2003).

Varios movimientos sociales latinoamericanos se han convertido en espejo de quienes sienten un malestar general que deriva de decisiones que se toman en el nivel de la economía o del aparato militar, pero que contaminan la cultura y los mundos de vida.

Esta situación de no violencia hacia las personas es una de las grandes diferencias con las viejas resistencias políticas que incluían la guerra de guerrillas, la lucha armada, el ataque directo a personas, etc., y que predominaron en gran parte del siglo XX. Por sus múltiples y dramáticas consecuencias, la violencia como recurso de la acción política fue muy discutida desde fines de los años ochenta. Y tal vez el caso más trágico sea la experiencia de la guerrilla peruana Sendero Luminoso. Por eso, el trabajo de Juan Carlos Guerrero Bravo, “Pasado, presente y futuro de las rondas campesinas antisubversivas en Junín, Perú”, se convierte en el caso testigo que nos permite comparar esas viejas formas de resistencia con los nuevos movimientos sociales que recorren el continente.

El autor reconstruye el proceso por el cual algunas comunidades campesinas que no registraban antecedentes de violencia llegan a constituirse en una especie de ejército civil para defenderse del proyecto autoritario del Partido Comunista Peruano y Sendero Luminoso (PCP-SL). Dice Guerrero Bravo que la demolición casi literal de lo viejo que proponían el PCP y SL se llevaba adelante con amenazas, asesinatos a las autoridades de las comunas campesinas, destrucción de la infraestructura de la región, etc.; y, sobre la base de tal destrucción, se ideaba la creación de una organización de nuevo tipo. Esta intervención guerrillera en Junín, como antes en Ayacucho, desató el accionar de las fuerzas represivas que, como en el resto de América Latina en los años previos, violaron los derechos humanos más elementales.

El autor describe la militarización de la vida cotidiana a la que se vieron forzadas estas comunidades, la necesidad de la autodefensa, la relación tensional con el ejército (único indicio del Estado ausente), así como las historias locales de la guerra. De este modo, nos remonta a uno de los períodos más confusos y dramáticos del siglo XX peruano y del resto de América Latina. El trabajo llega hasta nuestros días y, mediante información primaria, nos permite apreciar el esfuerzo de reconstrucción y las marcas dramáticas que dejó este proceso.

El resto de los textos da cuenta de los nuevos movimientos y las nuevas expresiones de protesta, donde los repertorios de acción, las estéticas y los sentidos que construyen, las disputas en las que se

inscriben, los diferencian radicalmente de la experiencia de la guerrilla peruana³.

Los trabajos presentados en este apartado registran las acciones de sujetos diferentes en sus múltiples demandas, con formas variadas de *aparecer* en el espacio público. Son indígenas, campesinos, trabajadores rurales, chacareras. Uno de los artículos enfoca a las mujeres en su lucha por la tierra y por la preservación del trabajo. Todos registran los procesos socioeconómicos que enmarcaron estas luchas y las modificaciones en la agricultura y el mundo agrario de cada uno de los países.

Como decía en los primeros párrafos de esta introducción, los indígenas fueron actores primordiales en este proceso de movilización y lucha de los años noventa. Tanto Chiapas como Ecuador, y más tarde Bolivia, dan cuenta de que estos movimientos indígenas presentan aspectos que se resisten a ser analizados con las viejas categorías de las Ciencias Sociales convencionales y los antiguos enunciados generales. Chiapas, Ecuador y Bolivia nos desafían a pensar estas nuevas configuraciones donde las poblaciones indígenas reivindican su identidad, pero se incluyen a la vez en demandas y propuestas que nos abarcan a todos y mantienen el carácter universal de la política emancipadora.

Chiapas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), los movimientos indígenas que protagonizaron “la guerra del gas” en Bolivia, han encontrado gran repercusión internacional, pues han puesto en jaque a sus respectivos estados (dos de ellos han logrado destituir a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo). No obstante, en este período se llevaron a cabo otros movimientos, más localizados, pero que marcaron problemas tales como la depredación de los recursos naturales, la falta de respeto a la diversidad biológica y cultural, las ciudadanizaciones laceradas, etc., y que se sumaron a las luchas indígenas del continente.

El trabajo de Daniela Mariotti nos acerca dos casos del Sur del continente: “El conflicto por la tierra de las comunidades aborígenes Kollas de Argentina y Mapuche-Pehuenche de Chile”. En él demuestra cómo estos actores son capaces de conectarse a ese entramado de dis-

3 Dejo de lado, intencionalmente, las guerrillas colombianas ya que, a diferencia de algunos autores (Petras y Veltmeyer, 2001), no las considero dentro de la lucha de los movimientos campesinos latinoamericanos ni dentro de los nuevos fenómenos que ameritan reflexión. Las considero parte del viejo problema de “las violencias” de Colombia.

cursos de la globalización para lograr insertar en la agenda pública nacional e internacional sus derechos históricos, su visión acerca de la relación entre naturaleza y sociedad, y su lugar en el mundo contemporáneo. Para ello, generan alianzas; entre las cuales, las más fructíferas se dan con las organizaciones ecologistas y las orientadas a respetar los derechos humanos.

El discurso de los “derechos” ligado a la noción de ciudadanía atraviesa el trabajo de Mariotti. La autora sostiene que “el tema indígena –a diferencia de otros reclamos que también están inmersos en la misma tensión (universalidad de los derechos individuales y particularidades comunitarias), como el de las mujeres– plantea el problema de la relación entre los derechos individuales y colectivos”. A través de los densos estudios de casos, se muestra cómo la presencia de estos actores fue invisibilizada durante muchas décadas bajo categorías homogeneizadoras (“chilenos”, “argentinos”) o referidas a una ubicación en los espacios sociales y productivos (“campesinos”). Con sus luchas actuales, los aborígenes adquieren una presencia social y política que los articula a una red de movimientos indígenas que recorre el continente.

La lucha por los recursos se hace presente en todos los casos estudiados; el reclamo por la tierra tiene larga data en América Latina. Esta aparece como problema no sólo por su singularidad en el proceso de producción capitalista (se comporta como una mercancía sin ser producto del trabajo humano), sino por la génesis histórica colonial de nuestros territorios, convertidos luego en naciones. Según Miguel Teubal, “no es de extrañar si consideramos que [América Latina] fue una de las más antiguas y vastas regiones de colonización que hubo en el mundo. Los cinco siglos de colonización y dominio, fundamentalmente español y portugués, hicieron estragos en las culturas indígenas preexistentes, tergiversaron sus instituciones, sus relaciones productivas, sus culturas e hicieron peligrar su existencia misma. América Latina fue un vasto continente con una historia compleja y multifacética. La forma en que los conquistadores ocuparon y se adueñaron de la tierra, sometiendo a la población indígena, apropiándose de mano de obra africana para transformarla en esclava, tuvo una influencia decisiva sobre los desarrollos posteriores” (Teubal, 2004: 6). Los grandes latifundios, las haciendas, las plantaciones se constituyeron como la base del modelo agrario latinoamericano legalizado por las cartas fundacionales de las naciones que se fueron formando durante el siglo XIX. El siglo XX estuvo marcado

por las luchas de las comunidades indígenas y campesinas para recuperar o acceder a las tierras. Desde la Revolución Mexicana en adelante, la lucha campesina por la tierra en el continente pasó por diferentes ciclos, de acuerdo con las diversas relaciones entre el movimiento social y el Estado, pero no cesó

En el siglo XX, a partir de la década de los noventa, esta lucha expresa una mayor autonomía del movimiento social. En los procesos que conducen a la distribución de tierras, se inicia generalmente una movilización y se producen los asentamientos de las familias. Luego, se entablan las negociaciones con los gobiernos y los terratenientes, pero ya no es el Estado el que plasma programas agrarios para los campesinos asentados sino que, en la mayoría de los casos, son ellos los que despliegan sus propios modelos productivos, que, con frecuencia, son opuestos y alternativos al modelo hegemónico. Estas prácticas son usuales dentro de los *sem terra*, pero también en muchos otros movimientos del continente.

En la Argentina, donde se aniquiló a gran parte de las poblaciones indígenas, no hubo un proceso de reforma agraria, pero tanto la población criolla como la inmigrante fue accediendo a la tierra a través de complejos procesos de ocupación de terrenos fiscales, colonización y arreglos contractuales con los terratenientes (arrendamientos, aparcerías, medierías). Las luchas de las primeras nueve décadas del siglo XX las llevaron a cabo colonos que demandaban mejores condiciones del contrato de arrendamiento (1912) y, unas décadas después, campesinos medios integrados a los mercados agroindustriales, que demandaban precios y mejoras en las condiciones de producción (en los años setenta). La tierra no se incluyó como demanda significativa hasta la década siguiente.

En este libro se presentan tres trabajos referidos al caso argentino. Sus protagonistas son diferentes actores sociales, pero todos ellos tienen que ver con reclamos sobre la tierra. El caso ya comentado de Daniela Mariotti sobre los Kollas de Salta permite reconstruir la saga de los indígenas que durante varias décadas del siglo XX reclamaron sus tierras comunitarias al ingenio San Martín del Tabacal, alternando, en dicho proceso, los conflictos y las negociaciones. Pero a partir de los años ochenta estas demandas –sumadas a las de carácter ecológico que comentamos anteriormente– lograron nuevas alianzas hasta conseguir la promulgación de una ley. Si bien la lucha continúa, el sentido indígena de la tierra se difunde en una sociedad que, tradicionalmente, fue indiferente a las poblaciones originarias.

Otro de los artículos referidos a la Argentina es el de Pablo Barbeta y Pablo Lapegna, “No hay hombres sin tierra ni tierra sin hombres: luchas campesinas, ciudadanía y globalización”. En él, comparan el Movimiento Campesino Santiagueño con la Federación de Campesinos de Paraguay. El caso argentino muestra la lucha campesina en una de las provincias más rurales del país, donde el avance de la frontera agraria pone en peligro a comunidades enteras que durante el siglo XX produjeron y vivieron en esas zonas. Una vez más, la tierra está en peligro de ser expropiada por los nuevos inversores (actualmente sojeros), y las poblaciones han logrado frenar el proceso por medio de una organización que generó varios sentidos acerca de la tierra y pudo hacerlos comprensibles a las poblaciones urbanas. La tierra como herramienta de trabajo y de vida, como herencia de los padres campesinos, como soporte de una historia y cultura provinciales, no sólo son enunciados entendibles para muchos sectores urbanos, sino que también los toman los más vulnerables, y se generan alianzas rurales-urbanas impensables unas décadas atrás.

El tercer actor en lucha por la tierra son las mujeres “chacareiras” que presenta Karina Bidaseca en “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha y el Movimiento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu”. El estudio está atravesado por la problemática de género en comparación con otras luchadoras brasileñas.

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MNL) hace su aparición en 1995 frente al peligro de que, por la morosidad de sus propietarios, se remataran tierras con hipoteca bancaria. En esta ocasión, lucharon por no perder esos patrimonios familiares que conectaban a estas franjas de chacareros (*farmers* en la bibliografía anglosajona) con las historias de colonización y agriculturización del país. Este movimiento –que logra parar desde su nacimiento más de quinientos remates (Giarracca y Teubal, 2001)– anticipa la lucha de amplios sectores medios de la Argentina (ahorristas, pequeños deudores, etc.) contra las expropiaciones del capital financiero bancario. El sentido de la lucha por la tierra fue cabalmente comprendido por estos sectores medios urbanos antes de la crisis de 2001, pues se sentían expresados en estas historias de expropiación de pequeños patrimonios familiares.

Mientras que el trabajo de Barbeta y Lapegna compara la lucha campesina del MOCASE con la que desarrollan los paraguayos en la Federación Nacional Campesina de Paraguay (ambas organizaciones son miembros del CLOC y Vía Campesina), el estudio de Bidaseca

compara a las chacareras con las trabajadoras del Nordeste brasileño en su lucha por mantener su trabajo: las quebradeiras de coco babaçu.

Las quebradeiras basan su lucha en la necesidad de garantizar formas de acceso y uso común de los palmares de babaçu, pues en el transcurso del tiempo esas áreas fueron cercadas y apropiadas por hacendados y empresas agropecuarias. En tal sentido, en el caso de las quebradeiras también se lucha por la tierra, ya que cuando se producían estos cercamientos se ponía en riesgo la subsistencia de tales trabajadoras.

Como evidencian todos estos casos, la tierra en América Latina sigue constituyendo un recurso fundamental y, al mismo tiempo, se presenta como un recurso polisémico: si bien casi todos los actores luchan por él, lo hacen desde diferentes sentidos. Del mismo modo, estas luchas adquieren diversos significados dentro de los movimientos sociales que las integran. Es importante diferenciar los movimientos cuyas demandas por la tierra están conectadas a otras y a otros actores, de las de carácter puramente sectorial, que se relacionan más con la acción corporativa.

En los casos presentados, esto se puede observar con claridad: los pueblos originarios articulan la reparación histórica de su tierra con otras demandas, como las del medio ambiente, la defensa de otros recursos naturales, la expansión de derechos ciudadanos; el MOCASE articula la lucha por la tierra con la lucha por la soberanía alimentaria y la biodiversidad; las quebradeiras, con el trabajo y la ciudadanización laboral. Y en el ejemplo paraguayo, como demuestran Barbeta y Lapegna, la lucha por la tierra está enmarcada en la disputa por llegar al Estado.

Las Mujeres Agropecuarias en Lucha, que tuvieron gran significación en sus comienzos, no pudieron articular la defensa de su patrimonio con otras demandas que las acercaran a las luchas campesinas o a otros movimientos de mujeres. A mi juicio, no se logró comprender que el endeudamiento formaba parte de un modelo agrario que se estaba pergeñando y cuyo eje era la producción sojera, con las semillas transgénicas y la siembra directa, orientada a la exportación. Aunque este modelo trae fuertes consecuencias en el nivel de la alimentación de la población y de la estructura social agraria, no se lo cuestionó. Esta posición diferenció al MAL de la mayoría de las organizaciones campesinas ligadas a Vía Campesina, que plantean una fuerte crítica a la producción sojera para la exportación y mantienen el principio de la soberanía alimentaria. Del mismo modo, a pesar de

ser una organización de mujeres, también se mostraron bastante indiferentes a los problemas del género, y esa situación las ubicó siempre en una relación tensional con las luchas de esos otros movimientos. Con las candidaturas políticas de varias de sus dirigentes pioneras, el movimiento de chacareras terminó incluido en la lógica de la representación partidaria. Cuando falló también esta estrategia y se retiraron del partido político con una declaración pública, el movimiento ya estaba fragmentado y debilitado. De todos modos, habían logrado algunas medidas en relación con sus deudas bancarias que beneficiaban a muchas de ellas.

En un cuarto trabajo sobre la lucha del mundo rural de la Argentina, se aborda a los trabajadores rurales, que fueron quienes sufrieron con mayor rigor el modelo neoliberal. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) estima que en el campo argentino trabajan más de un millón de asalariados, pero figura formalmente menos de una cuarta parte. El discurso neoliberal de la “flexibilización laboral” nominó lo que desde hace décadas acontecía en el campo argentino y lo agravó aún más. La falta de fiscalización oficial y el debilitamiento del movimiento sindical durante y después de la dictadura empeoraron la situación existente: al problema de la disminución de puestos de trabajo por los procesos de mecanización se le sumó una mayor precarización e informalidad en las condiciones laborales.

Durante el ciclo de protestas iniciado en 1991, los trabajadores rurales y agroindustriales figuran protagonizando menos conflictos que otros actores (véase Giarracca, 2003). No obstante, hubo algunas excepciones relevantes, como la huelga de los trabajadores explotados del sector citrícola de Tucumán (véase Alfaro, 2001) o la que nos presenta Victor Rau en su texto, “Transformaciones en el mercado de fuerza de trabajo y nuevas condiciones para la protesta de los asalariados agrícolas”.

El autor describe un paro de los colonos misioneros, productores de yerba mate, en el año 2000. Se trató de un *paro agrario con boicot a la industria* que llevó el nombre de “Paro Verde”, se extendió a toda la provincia de Misiones, ubicada en el Noreste del país, y duró treinta y cinco días. Las formas de protesta no fueron muy distintas de las que se venían desarrollando en todo el interior del país: interrupción del trabajo, cortes de ruta, instalación de “carpas de protesta”, intercepción de la circulación de productos por tiempo indeterminado. Pero la novedad fue que a esta protesta se le sumó el conflicto

de los trabajadores cosecheros de la yerba mate, los *tareferos*, que hicieron públicos sus propios reclamos. Afirma el autor que “la protesta de los colonos instala la problemática yerbatera en la escena pública, incluso a nivel político, y suscita el apoyo de las clases medias urbanas que la reconocen como legítima. Los obreros agrícolas, que constituyen un sector étnicamente diferenciado respecto a los productores y culturalmente oprimido al interior de la sociedad misionera, se ven afectados por el paro, se vuelcan a las rutas y hacen uso, al igual que los colonos, de las ‘carpas de protesta’. La comunidad en su conjunto los reconoce como *tareferos* con sus reclamos específicos”.

Lo interesante de este caso es que muestra cómo, en un ciclo de protestas, pueden incorporarse incluso sectores sin tradición de movilizaciones. En esta oportunidad, los trabajadores rurales se vieron estimulados por el paro de los colonos y, seguramente, por muchas otras luchas de campesinos, de pueblos originarios, de desocupados, etc., que se estaban llevando a cabo en todo el país.

Tenemos, finalmente, el trabajo de Lorgio Orellana Aillón: “El proceso insurreccional de abril. Estructuras materiales y superestructuras organizativas de los campesinos regantes en el Valle Central cochabambino”. La guerra del agua boliviana del año 2000 se actualizó en muchos de sus sentidos en octubre de 2003, cuando todo un pueblo se opuso y resistió al despojo de otro recurso natural: el gas. Estas luchas por los recursos naturales, por la preservación de las riquezas del territorio, atraviesan el presente latinoamericano y se proyectan como uno de los ejes de conflicto de las próximas décadas. La confrontación se da contra las empresas trasnacionales que, por medio de las privatizaciones, se hacen cargo del recurso, pero también contra los estados nacionales, que asumen una actitud complaciente y cómplice frente a esta transferencia de riquezas.

El trabajo de Orellana Aillón organiza históricamente los procesos de privatización de los recursos hídricos frente a las construcciones sociales que la población cochabambina había creado para abastecerse del agua. Con muchos detalles, nos acerca la rebelión, la formación de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, así como también los motivos de su desactivación. El análisis político de la organización muestra las dificultades que existen para que las acciones disruptivas –que aseguran la rebelión y muchas veces permiten alcanzar el objetivo– se cristalicen en organizaciones que mantengan en su interior los sentidos básicos de la lucha.

La “guerra del agua” –como se denomina el conflicto del año 2000 en Cochabamba– presagió un problema que hoy se muestra cabalmente en Bolivia: la ausencia de un Estado capaz de organizar las riquezas nacionales en función de las necesidades de su población⁴. Como sostiene Mirko Orgaz (2003), el proceso de privatización como expresión de la globalización colocó a Bolivia como polo de transferencia de excedente económico y fuente de aprovisionamiento energético. “Esta situación ha provocado un empobrecimiento generalizado en Bolivia y la casi extinción de lo que llamamos Estado nacional y nación boliviana” (Orgaz, 2003: 17).

Los recursos naturales, como el agua, el gas, el petróleo, las minas y la tierra, están en disputa en América Latina, y los actores sociales generados al calor de luchas y rebeliones son protagonistas de primer nivel. Las transnacionales y sus aparatos legales –como el CIADE del Banco Mundial (Centro internacional para el arreglo de diferendos relativos a inversiones)–, los estados –con su voluntad política y margen relativo de negociación– y los movimientos sociales, disputan en las arenas donde la política parece reinventarse. Una sociedad civil que lucha no sólo por una vida digna, sino por las riquezas de su territorio, por el posicionamiento regional y por la fraternidad con otros movimientos del mundo.

La cantidad de actores movilizados que muestran los diferentes trabajos permite visualizar las múltiples demandas que están en juego y cómo estas se inscriben de modo diferencial en los espacios de una lucha de mayor alcance a lo largo del continente. Como veremos a lo largo de este libro, algunas acciones son puntuales, se hacen por reivindicaciones sectoriales que, una vez conquistadas, provocan la disolución o debilitamiento del movimiento. Otras, como la del agua en Bolivia, sostienen luchas difíciles, pasan, entran en latencia y luego reaparecen con otras formas pero con los mismos sentidos, como sucedió con el caso del gas en octubre de 2003. Y también hay acciones que se inscriben en un espacio de resistencia general y permanente, con articulaciones en el orden global, como son las que llevan a cabo las organizaciones, movimientos y federaciones que integran Vía Campesina.

4 Mirko Orgaz estima en 68 mil millones de dólares el negocio del gas boliviano (exposición pública en el seminario “Conflicto y colaboración en el manejo de los recursos naturales”, Tarija, noviembre de 2003).

Cabe interrogarse, a modo de cierre, si la expansión de la conflictividad social de nuestros días y las nuevas construcciones sociales bastan para lograr desarmar esa gramática de poder que los neoliberales generaron durante los últimos veintiocho años en América Latina. Si constituyen la base para reinventar una política emancipatoria, como nos dice Boaventura de Sousa Santos (2000).

La llamada corriente italiana (Negri, Virno) sostiene que el poder imperial ha atravesado todas las esferas de la vida, todos los espacios sociales y, por tanto, en cualquiera de ellos es posible y necesaria la resistencia. Según Hardt y Negri, “[el imperio] no sólo regula las interacciones humanas; además procura gobernar directamente toda la naturaleza humana” (Hardt y Negri, 2002: 14). Pero, unos párrafos más adelante, agregan: “Las fuerzas creativas de la multitud que sostienen el imperio son capaces de construir autónomamente un contraimperio, una organización política alternativa de los flujos e intercambios globales” (Hardt y Negri, 2002: 17). Es decir, la resistencia se despliega en el propio imperio, en los propios meandros sociales de la dominación, y allí se gesta lo nuevo. Frente a una concepción tal, una dominación sin límites, sin espacios y tiempos definidos, le contraponen un social expandido a través de las resistencias, las luchas y los deseos de la multitud. Dentro de las numerosas críticas recibidas por el polémico trabajo, importan aquellas que muestran cómo los autores no pueden salir de la concepción ontológica de “totalidad” que, aunque en contradicción, se expresa siempre a sí misma (Cerdeiras, 2003).

Para otras concepciones teóricas, más ligadas a los paradigmas liberales, las protestas y movimientos sociales son parte de las formas democráticas de gobierno y, a partir de ellas, pueden ampliarse los márgenes de los derechos individuales y sociales con total independencia de los modos de control económico (Schuster y Pereyra, 2001; Pérez, 2002). Laclau y Mouffe (1987) piensan la transformación, la no-reproducción, desde una política que no es otra cosa que una de las formas de presentación de lo social. La política opera en una situación que es anterior a ella –una situación social sedimentada–, pero la subvierte y crea una situación nueva, imposible de predecir desde la vieja estructura. Todos estos autores recuperan la posibilidad de una democracia radicalizada sin cuestionar la “representación” y los partidos políticos.

Para el francés Alain Badiou (2003), la política puede aparecer, en efecto, en cualquier espacio de la vida social, pero no todo espacio

social es político. Por el contrario, la política es la excepcionalidad de lo social, marca una diferencia con el espacio de luchas meramente sectoriales, con sus propios intereses. La política es lo que aún permanece impensado, lo no acontecido; es desinteresada y necesita de una intervención subjetiva. Tanto para Badiou como para Raúl Cerdeiras (2002), director de la revista *Acontecimiento* de Buenos Aires, “la política que viene” (que reinventamos) está a distancia del Estado, se debe plantear fuera de los partidos políticos y requiere de formas inéditas de organización.

Entre la posición que enuncia que todo lo social es político y la que sostiene la excepcionalidad de la política, podemos incluir el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos (2000), que propone pensar estos movimientos sociales, con sus ricos procesos, como “campos de experimentación” donde es posible vencer “lo imposible”. Esta propuesta nos permite recuperar y actualizar otras experiencias que resistieron en el tiempo al discurso modernizador y que rescatan otros saberes, otros modos de relación con la naturaleza. Como vimos en este capítulo, las experiencias de las comunidades aborígenes o campesinas, en las que los conocimientos y las organizaciones ancestrales se entraman con un pensamiento nuevo, son los mejores ejemplos de la propuesta del autor.

Hoy, la esperanza reside en la posibilidad de crear campos de experimentación social donde sea posible resistir localmente las evidencias de la “inevitabilidad”, promoviendo con éxito alternativas que parecen utópicas en todos los tiempos y lugares, excepto en aquellos en que efectivamente ocurren. “Es este ‘realismo utópico’ que preside las iniciativas de los grupos oprimidos que, en un mundo donde parecen haber desaparecido las alternativas, se van construyendo, un poco por todas partes, alternativas que tornan posible una vida digna y decente” (De Sousa Santos, 2000: 36).

La creación de nuevos pensamientos políticos (una decisión ligada a una ruptura, como dice Badiou) atraviesa el continente. Las discusiones acerca de la política a distancia del Estado, el cuestionamiento a la “representación” como idea del liberalismo, el problema indígena como cuestión política, la autonomía, la democracia radicalizada, directa, participativa, etc., aparecen y reaparecen en cada nueva rebelión, en cada nueva resistencia. Si aceptamos que la teoría crítica lo es porque no se reduce a la “realidad” de lo que existe, que deja espacio a las posibilidades que aún

no existen (De Sousa Santos, 2000: 23), nuestro lugar está donde se apuesta a estas invenciones⁵.

Nuestro desafío como científicos sociales de América Latina es acompañar con un pensamiento activo estas experiencias, estar atentos a las nuevas prácticas e ideas políticas, buscar los modos más abiertos de acompañar las resistencias, seguirlas en sus derroteros, sentirnos parte de una red que las incluye y nos incluye como investigadores, universitarios y académicos, y que nos brinda la posibilidad de intervenir en el proceso de generación de conocimientos, reflexión y crítica. Y también como veremos con los primeros cuatro trabajos de este libro, las transformaciones en los niveles económicos y sociales ameritan conocimientos sólidos y profundos. Por eso, a modo de cierre, querría manifestar la satisfacción que siento por haber cumplido la función de Coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO (1997-2001) cuando estos jóvenes llevaron a cabo estos trabajos, y por acompañarlos en esta publicación. Entre todos –instituciones y sujetos– estamos reproduciendo un área de estudios rurales de alta calidad, enmarcados en la mejor tradición del pensamiento social crítico, que es uno de los grandes patrimonios culturales de América Latina.

Bibliografía

- Alfaro, María Inés 2001 “Los trabajadores citrícolas en Tucumán: las condiciones para la construcción de la protesta social” en Giarracca, N. *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza Editorial).
- Badiou, Alain 1990 *Se puede pensar la política* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Badiou, Alain 2003, “Conferencia en Buenos Aires” en *Acontecimiento* (Buenos Aires), N° 26.
- Bartra, Armando 2003 “El campo no aguanta más, a báscula” en *La jornada* (México, DF), 23 de abril.
- Cassen, Bernard 2003 “Los efectos de la liberalización del comercio mundial” en *Le Monde diplomatique*, año V, N° 51, septiembre.

5 Dice un documento del subcomandante Marcos: “Los zapatistas son muy otros, no sé si ya te lo dije, así que imaginan cosas antes de que esas cosas estén y piensan que nombrándolas esas cosas empiezan a tener vida, a caminar y así a dar problemas... habrán imaginado algo y va a ser como si ese algo ya existiera y nadie va a entender nada hasta que pase un tiempo porque, en efecto, ya nombradas, las cosas empiezan a tener cuerpo, vida, mañana” (Chiapas: la treceava estela, agosto de 2003).

- CEPAL 2003 *Situación y Perspectivas. Estudio económico de América Latina y el Caribe* (Naciones Unidas, CEPAL).
- CEPAL <<http://www.eclac.cl/>>
- Cerdeiras, Raúl 2002 “La política que viene” en *Acontecimiento* (Buenos Aires: Ediciones la escuela porteña), N° 23.
- Cerdeiras, Raúl 2003 “Las desventuras de la ontología. Biopolítica del imperio” en *Acontecimiento* (Buenos Aires), N° 24-25, mayo.
- Ejército Zapatista de Liberación Nacional 2003 “Chiapas: la treceava estela” en <<http://www.fzln.org.mx/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=725>>
- Dávalos, Pablo 2003 “Plurinacionalidad y poder político en el movimiento indígena ecuatoriano” en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: OSAL/CLACSO).
- De Sousa Santos, Boaventura 2000 *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência* (Brasil: Cortez Editora).
- Dutorme, Bernard 2004 “Diez años de zapatismo en Chiapas” en *Le Monde diplomatique* (Buenos Aires), año V, N° 55, enero.
- Giarracca, N. y Del Pozo, N. 2004 “To make water... Water privatization and social protest in Tucuman, Argentina” in Barnnett, Viviene et al. *Swimming Against The Current: Integrated water resource management and gender in Latin America* (EE.UU.: University of Pittsburgh Press), en prensa.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 2001 “Crisis and agrarian protest in Argentina. The Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha in Argentina” en *Latin American Perspectives*, Vol. 28, N° 6, Issue 121, noviembre.
- Giarracca, Norma (comp.) 2001 *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO/ASDI).
- Giarracca, Norma 2003 “La protesta agrorrrural en la Argentina” en Seoane, J. (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: OSAL/CLACSO).
- Grinberg, L. y Grinberg, R. 1984 *Psicoanálisis de la migración y del exilio* (Madrid: Alianza Editorial).
- Hardt, M. y Negri, A. 2002 *Imperio* (Buenos Aires: Paidós).
- Laclau, E. y Mouffe, Ch. 1987 *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia* (España: Siglo XXI).
- NACLA *Report on the Americas* 2000, Vol. XXXIII, N° 5, marzo/abril.
- Orgáz García, Mirko 2003 *La guerra del gas* (La Paz, Bolivia).
- Pacari, Nina 1996 “Taking on the neoliberal agenda” en *NACLA. Report on the Americas*, Vol. XXIX, N° 5, marzo/abril.

- Página 12 2003 *La guerra no ha terminado*, 31 de diciembre.
- Pérez, Edelmira 2001 “Hacia una nueva visión de lo rural” en Giarracca, Norma (comp.) *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO/ASDI).
- Pérez, Germán 2002 “Modelo para armar: complejidad y perspectiva de la protesta social en la Argentina reciente” en *Argumentos* (Buenos Aires: Revista del IIGG), N° 1, diciembre.
- Petras, J. y Veltmeyer, H. 2001 “Are Latin American peasant movements still a force for changes? Some new paradigms revisited” en *Journal of Peasant Studies* (Gran Bretaña: Frank Cass Journal), Vol. 28, N° 2, enero.
- Schuster, F. y Pereyra, S. 2001 “La protesta social en la Argentina democrática. Balance y perspectivas de una forma de acción política” en Giarracca y colaboradores *La Protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Schuster, Federico 2002 “La trama de la protesta” en *Cuadernos de coyuntura* (Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires), N° 4.
- Spoor, Max 2002 “Policy Regimes and Performance of Agricultural Sector in Latin America and the Caribbean during the last three decades” en *Journal of Agrarian Change* (Inglaterra: Blackwell Publishing), Vol. 2, N° 2, julio.
- Teubal, Miguel 2004 “Perspectiva sobre la tierra y la reforma agraria en América Latina” en *Realidad Económica* (Buenos Aires), N° 200.
- Teubal, Miguel y Rodríguez, Javier 2002 *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica* (Buenos Aires: La Colmena).
- Vía Campesina <<http://www.viacampesina.org>>

PRIMERA PARTE

TRANSFORMACIONES Y NUEVAS RURALIDADES